

ITALIA

LA CRISIS DE LA ACERÍA ILVA

Los graves problemas de la mayor fábrica siderúrgica italiana, que se están arrastrando sin soluciones desde comienzos del verano y han seguido durante todo el mes de noviembre, culminaron, a finales del mismo, con la intervención directa del Gobierno, tras la ocupación, por parte de un grupo de trabajadores, de la dirección de la empresa, como respuesta a la decisión de sus responsables de suspender la actividad de la planta en Taranto, en el sur del país, lo que afectará a más de 5.000 trabajadores.

El cese de la actividad del ILVA, la mayor planta de fabricación de acero de Europa, se anunció el lunes 26, después de que un juez emitiera siete ordenes de arresto contra dirigentes de la empresa, acusados de asociación para delinquir y corrupción, dentro de una investigación por contaminación ambiental de la fábrica.

Asimismo, el juez ordenó la confiscación de la producción y del área de enfriamiento de la acería.

Tras la orden judicial, la empresa anunció la suspensión de la actividad de la planta de Taranto, que da trabajo a entre 5.000 y 7.000 trabajadores de forma directa o indirecta, ya que, según sus responsables, no es posible seguir adelante con la actividad de la planta ante la imposibilidad de comercializar sus productos.

A la ocupación de las oficinas de la dirección de la planta de Taranto se sumaron además otras acciones de protesta, como sentadas ante diferentes entradas de la misma, en esta jornada de protesta convocada por los sindicatos FIOM-CISL y UILM-UIL.

Cerca de unos 3.000 trabajadores, informaron los medios de comunicación locales, acudieron hoy a la planta del ILVA, mientras un grupo de ellos forzó uno de los accesos, lo que llevó a los responsables de la fábrica a abrir los accesos al interior del recinto, después de que inicialmente se hubieran desactivado los tornos de la entrada.

ILVA cuenta, en total, con cerca de 12.000 trabajadores mientras se calcula que otras 9.000 personas dependen de su actividad.

Varios informes responsabilizan a los altos hornos del ILVA de causar tumores a la población local y producir el 93 % de todas las emisiones de partículas tóxicas en Italia, aunque sus responsables defienden que las emisiones se mantienen dentro de los límites legales establecidos. La fiscalía de Taranto investiga 174 muertes de las 386 atribuibles a las emisiones de la fábrica y analiza 237 casos actuales de cáncer, 247 patologías coronarias y 937 enfermos de las vías respiratorias. Uno de los peritos encargados por el juez instructor para analizar la situación, Annibale Biggeri, explicó que se ha comprobado una mayor mortalidad y hospitalizaciones en los barrios cercanos a la fábrica por motivos vinculados a las partículas industriales que se respiran.

El pasado 26 de julio la Magistratura ya ordenó cerrar seis de los ocho altos hornos de la fábrica y desencadenó una auténtica guerra en Taranto, donde viven 200.000 personas.

En Taranto en los últimos meses se abrió el debate entre aquellos que abogaban por cerrar la acería sospechosa de incrementar los casos de tumores y los que defendían los cerca de 20.000 puestos de trabajo que se perderían con su cierre.

En esa batalla social y económica tuvo que intervenir el Gobierno, que ha intentado mediar para evitar que se cierre esta fábrica.

A finales de mes, el Consejo de Ministros ha promulgado un decreto urgente para que la fábrica no cierre pero se cumplan determinadas condiciones de seguridad ambiental. Un decreto, denominado por el mismo Monti "Salva ambiente, salud y trabajo", que "blinda" durante tres años las instalaciones y vigila sobre las mejoras en las mismas, a través de la institución de un garante *ad hoc*.